

# LAS CALLES SUDAMERICANAS PERSISTEN Y ANUNCIAN LO QUE VENDRÁ

*Bajo el Volcán*, año 1, núm. 2 digital, mayo-octubre 2020

Salvador Schavelzon<sup>1</sup>

Recibido: 25 de febrero, 2020

Aceptado: 10 de marzo 2020

## RESUMEN

Los meses de octubre y noviembre de 2019 trasladaron el protagonismo político a las calles en varios países latinoamericanos. En Colombia y Chile, gobiernos de derecha que venían de imponerse electoralmente, encontraron fuertes protestas, que iniciaron 2020 sin solución de continuidad. Aún sin respuestas a la altura de la movilización, parecen abrirse caminos de imaginación política de lo que antes era impensable.

*Palabras clave:* movilización, latinoamerica, protestas.

## ABSTRACT

The months of October and November 2019 brought political prominence to the streets in several Latin American countries. In Colombia and Chile, right-wing governments that had come to impose themselves electorally, encountered strong protests, which started 2020 without a continuity solution. Even without answers at the height of the mobilization, paths of political imagination could open up of what was previously unthinkable.

*Keywords:* mobilization, Latin America, protests.

---

<sup>1</sup> Profesor investigador, Universidad Federal de San Pablo.

## INTRODUCCIÓN

No se trata en este texto de especular la revolución deseada a partir de protestas disímiles. Estas no abren un escenario de cambio real a la vuelta de la esquina. El sistema está asegurado, protegido por un control que desafía las luchas como fuerza omnipresente, en un plano bien alejado de las discusiones de distintas identidades políticas en disputa por el voto. Las insurrecciones urbanas se muestran potentes en un contexto de neoliberalismo globalizado, donde el conflicto con el capital no se reduce a fábricas y recorre las metrópolis invadiendo todo espacio, sin tiempo ajeno a la lógica de valorización.

Pese a que todavía no sabemos a dónde las protestas nos llevan, ni cuáles son las tareas que las preceden o suceden, la forma levantamiento general de la población parece encontrar un espacio de disputa. Al mismo tiempo, hasta ahora vemos que estas formas no vulneran directamente la fortaleza del sistema, pero son la modalidad que hoy toma la protesta como camino que puede constituirse en quiebre posible, siempre que encuentre la forma de mantenerse con consistencia y magnitud, y así forzar cambios.

En este texto, tratamos de recorrer la coyuntura sudamericana reconstruyendo contextos de cada país, que nos permitan entender dónde estamos. Entre avance de la derecha, la vuelta del progresismo y el movimiento de las calles, que nos pone nuevas cuestiones, buscaremos describir un momento especial, con algunas intuiciones sobre la importancia de la lucha autónoma que no esté presa a la lógica institucional, y la evidencia de que nos encontramos en un tiempo político nuevo.

En Ecuador, el sucesor de Rafael Correa, Lenin Moreno, su antiguo vicepresidente devenido rival, enfrentó 11 días de rebelión que revirtieron medidas impopulares, especialmente el fin de la subvención a los combustibles, vigente por décadas, siguiendo recomendación del FMI. Como en Chile y Colombia, la impug nación

de las calles ecuatorianas no parece traducirse en apoyo político para opositores. El correísmo buscó entrar sin éxito en el escenario de protestas.<sup>2</sup> Las organizaciones indígenas, con alto protagonismo, dejaban claro que no querían ni a Lenin ni a Correa. Es difícil ver la solución en quien poco antes criminalizaba protestas y militarizaba territorios indígenas en busca de mineral para empresas extranjeras.

En gran medida, una indignación generalizada tiene como elemento constitutivo y unificador el desencanto con las alternativas políticas existentes, y con todo lo que el sistema representativo de partidos tiene para ofrecer, esto es, la continuidad del neoliberalismo y un modelo de desarrollo y civilización marcado por la exclusión y el individualismo. Crisis de representación y política, sin horizonte de cambios o alternativas en curso, ni abierto en alguna dirección. Las décadas que pasaron de las dictaduras, la decepción política de las experiencias de gobiernos democráticos, la ausencia de un horizonte socialista, del común o alternativo viable, hacen que no haya un camino, sino un vacío de respuestas, que no por tanto elimina el problema, ni la necesidad de disputar desde donde sea posible.

En ese sentido cabe pensar los recientes estallidos en un largo ciclo de luchas contra la globalización capitalista y la gestión neoliberal de la crisis, con semejanzas, así, con los levantamientos, protestas y revueltas populares como el de junio de 2013 en Brasil, el 15M de 2011 en España y Occupy Wall Street, junto a otros en todo el mundo. También la ola anterior, que incluye la aparición del zapatismo en 1994, la batalla de Seattle en 99, las rebeliones indígenas y urbanas de Bolivia y Ecuador, o diciembre de 2001 en Argentina. Estas protestas fueron convocadas por diversos disparadores, pero cuestionan rápidamente toda la situación política general, empleando internet y de forma descentralizada, sin las viejas herramientas

---

<sup>2</sup> Conaie tilda de “oportunistas” las declaraciones de Rafael Correa sobre fallecidos, heridos y detenidos. El Comercio ([www.elcomercio.com](http://www.elcomercio.com))

de la clase trabajadora, ni el alcance tradicionalmente limitado de las luchas sindicales: un desorden de explosión política que interrumpe la normalidad y crea un encuentro masivo en las calles que quiere cambios y no se contenta con poco.

A pesar de la centralidad que aún ocupa la figura de Evo Morales, la actual crisis boliviana también puede leerse como una crítica política a las instituciones y el gobierno, en la medida en que un elemento clave es la pérdida de apoyo popular mayoritario. La caída de Morales se inicia con la derrota en el referéndum de 2016 por la reforma para intentar una nueva reelección. La derecha ocupa el gobierno, después de 21 días de protestas contra el resultado electoral, pero tampoco afianza para sí un apoyo o consenso que garantice estabilidad en la detención del poder político. Las elecciones convocadas para mayo de 2020 abren la posibilidad de un retorno del MAS, con nuevo candidato a presidente, o el inicio de una transición comandado por fuerzas de centro o derecha.

El enfrentamiento entre progresistas y viejas o nuevas derechas está en pie. Se revitaliza en tiempo de elecciones y envuelve a muchos latinoamericanos, en especial las clases medias altas y tradicionales, alrededor de quienes se juega todo el juego mediático de la política institucional, y que viven esa oposición como el marco al que se reduce la política. Con la persistencia de la crisis, el deterioro del poder adquisitivo de las clases medias, la evidencia de un poder político que no resuelve la libertad, la igualdad, la mejoría que promete, mantiene abierto un conflicto que tiende a fomentar una situación inflamable sin dirección ni “proyecto”.

El progresismo y la izquierda gobernaron la mayoría de los países latinoamericanos en la segunda mitad de la primera década del siglo. El modelo de consumo y crédito, que se tornaría endeudamiento y destrucción territorial, conquistó el voto de las clases medias bajas para estas administraciones, sin garantizar servicios públicos de calidad y acceso a un bienestar que permitiría definir a estos sectores, foco de la propaganda sobre el legado progresista, en verdaderas clases medias y no pobres de vida precaria. A pesar del apoyo popular y fuerza institucional consolidada, poco

puede decirse de cambios estructurales que afecten un modelo desigual, de desarrollo y pacto con las elites, que se beneficiaron individualmente de una coyuntura de crecimiento económico, sin ninguna renuncia a sus privilegios en el acceso al comando estatal de la economía, con favorecimiento en obras de infraestructura, contratos, y otros beneficios. El avance de la derecha que representa directamente estas élites, así, no podría realizarse sin un deterioro del apoyo popular a estos sectores políticos de origen de izquierda, que muestra la dificultad para movilizar de manera auténtica y verdadera a su favor población o base de apoyo, más allá del eventual voto.

En la segunda década del siglo vimos la constatación de la inviabilidad del progresismo como proceso emancipatorio. Volvieron los tratados bilaterales de libre comercio, la militarización de favelas y territorios indígenas con recursos naturales, la represión y criminalización de protesta social, el desarrollismo destructivo y con lógica de rapiña, no de distribución. No de soberanía, sino de inclusión en las relaciones capitalistas, el trabajo y la financierización de la vida, con endeudamiento y precariedad. En algunos países, donde la crisis se mostró más fuerte, el progresismo no tuvo tapujos en aplicar fuertes ajustes de austeridad, siempre priorizando los mercados financieros, en la distribución de recursos estatales. La combinación de neoliberalismo, control social y modelos de organización de la vida pautados por el capital, no se cuestionaría ni matizaría, aunque de hecho haya diferencias con la derecha en el formato de políticas públicas, cultura y derechos humanos.

Lo que en los encuentros del Forum Social Mundial al inicio del ciclo era el encuentro de una militancia inspirada por el zapatismo, de un lado, y Chávez como promesa de un camino posible más allá del neoliberalismo desde otro lado, estatal, es hoy su versión deteriorada, con un gobierno autoritario y hambre, en Venezuela, y una disputa partidaria en la región que abandonó la pretensión de realizar cambios estructurales. Los frutos del zapatismo, por su parte, dieron lugar a la lucha por autonomía en todo el continente, en un activismo anti estatal, verde, feminista,

por lo común que forma parte de la cultura de la militancia, que desarrolla cambios de costumbres, sobre cómo comer, menstruar, amar, y que es central y estratégica en la dinámica de la revuelta y levantamiento de las calles, instalado en nuestra política de hoy, pero marginal, si no se conecta con la dinámica del trabajo, su interrupción, y las mayorías explotadas en movimiento.

En un escenario inestable, la derecha de Mauricio Macri, que viene a dar cierre a los años progresistas, no logra su reelección en Argentina, ante un deterioro económico pronunciado. En Brasil de Bolsonaro, las promesas de mano dura contra la corrupción se desarman en poco tiempo, ante viejos y nuevos actores políticos que ya vienen con las viejas prácticas del poder incorporadas. Sin los buenos resultados económicos prometidos, aunque sin crisis económica fuera de control por parte del capitalismo brasileño, el apoyo al gobierno de Bolsonaro aún no entra en curva de apoyo descendiente, pero en conflictos internos pierde el control del partido político con que ganó la elección, no afianza apoyo popular masivo y para disputar la reelección dependerá exclusivamente de la efectividad de los lugares comunes retóricos que movilizan votantes convencidos por razonamientos conservadores. En Colombia, la complicidad del gobierno de Duque con un proyecto de muerte y de guerra no declarada contra los que luchan es inoculable, y las movilizaciones acompañan el deterioro de su apoyo.

La vuelta a las calles no anuncia una crisis del sistema, pero abre un momento de indefinición. La falta de respuestas convive con la presencia de líderes mediáticos, actores políticos insoslayables, al mismo tiempo depositarios de devoción y denostados como corruptos o totalitarios. Evo Morales, Cristina Kirchner, Inácio “Lula” Da Silva ocupan lugares similares, persecuciones, centralidad mediática en momentos de redefinición del poder, una base electoral garantizada pero también el mayor porcentaje de voto negativo y pérdida considerable del apoyo de otrora. Contra ellos, los opositores crecen más, muchas veces favoreciendo el camino para líderes personalistas de derecha, en distintos países.

Se trata de un eje de oposición izquierda-derecha, o más propiamente neoliberalismo con tinte social progresista, de inclusión, contra un neoliberalismo económico con política social conservadora, liberal en la economía y conservador en las costumbres, como dice la derecha del Brasil y otros lugares. No hay perspectivas de una nueva izquierda, o un proyecto post neoliberal que pueda mostrarse como alternativa desde dentro del juego institucional. Desde afuera, más allá de luchas y victorias defensivas puntuales, no hay tejidos de organización consistentes que amenacen el *status quo*.

Las calles en buena medida se leen y viven como oposición a los gobiernos. Pero no se reducen a esto. Otro eje opone la representación, los partidos y candidatos que componen ese escenario de ideas, con una política que descrea que el sistema dependa del teatro institucional-electoral. En este plano se torna visible la dimensión de la gobernanza neoliberal y de una conflictividad que envuelve un capitalismo en mutación, que ubica al trabajo en otro lugar, entendiendo sus características de valorización desorganizada, dependiendo de logística, imponiendo un modo precario y no conectado a las fuerzas políticas tradicionales.

Si miramos esta sensibilidad política no neoliberal y no institucional partidaria, que se opone a lo existente sin propuestas o formas organizativas con liderazgos o mensajes unificados, pero busca horizontes y actúa de forma imprevisible, entendemos una marca autónoma que encuentra presencia importante en la política de hoy, en oposición –aunque también con posibles articulaciones eventuales– con la lógica populista, o de izquierda estatal, progresista, nacionalista o socialista. En este sentido se entiende que el PT de Brasil, con el propio Lula da Silva y su candidato, ex alcalde de San Pablo en 2013, entiendan las jornadas de junio de 2013 con signo conservador y las imaginen como parte de conspiraciones imperialistas.<sup>3</sup> Estas protestas surgieron con los gobiernos pro-

---

<sup>3</sup> Lula acusa EUA de promover manifestações de Junho de 2013 com o objetivo de derrubar Dilma (revistaforum.com).

gresistas, como el 15M español. La heterogeneidad de las protestas da lugar a que se atribuya un sentido opuesto a la izquierda, o una ambigüedad que puede tener signo político indefinido.

En la búsqueda de horizontes, las luchas colocan en el centro la cuestión medioambiental, indígena, de tratados de libre comercio con impacto en las economías locales, la territorialidad, lo comunitario y la autonomía de formas de vida posibles o resistentes, no sólo rurales o selváticas sino también urbanas, centradas en la vida, el agua, la tierra, como acceso al suelo y la vivienda. También contra el trabajo, o de reapropiación del trabajo hecho para otros. Esta “agenda” que en realidad refiere a imaginarios y modos de existencia y tiende a alejarse de las “agendas” de la izquierda populista o estatal, están también en forma de modos de vida, de consumo, individualismo, competencia y mercantilización de la vida.

Hay algo de absorción de esta política en algunos cuadros del progresismo, especialmente cuando dejan el poder, o las izquierdas militantes y “críticas” que sin embargo no se emancipan de las líneas políticas de la izquierda mayoritaria. Lo que se impone especialmente, sin embargo, es no abrir puertas a estas agendas, que la izquierda institucional sabe que es contrapuesta al proyecto político que ellos asumen como inevitable. En los próximos años veremos, sin embargo, algo de margen para que luchas anti mineras en la cordillera de los andes, por el agua en Colombia y otros países, por la selva y los pueblos indígenas en la Amazonia y otros lugares, obtenga algo de apoyo de las izquierdas fuera del gobierno, cuando los gobiernos son conservadores, pero también indiferencia o ataque cuando la izquierda está en el poder.

En el gobierno, la izquierda y el progresismo osciló entre dos lugares. Por un lado, la forma democrática y liberal, con política partidaria orientada a ocupar las instituciones y, una vez en ellas, gobernar sin ninguna medida distributiva que cuestione las elites, sin asumir una violencia de los de abajo, sin subir impuestos ni afectar al poder económico concentrado. El progresismo neoliberal o el de la adecuación al poder sin tensión o miramientos (Fraser, “Trump o el fin....”). La otra posición se alinea con una izquierda

autoritaria, no liberal, sea porque revive formas caudillescas clásicas en el poder nacionalista o conservador latinoamericano, o desde tradiciones de un socialismo de Estado, de una izquierda vertical y desarrollista, no democrática. Ambas alimentan mitos de cambio, con guiños a las masas (contra la oligarquía y las élites), y que entonces aparece como justificación de una ocupación poco republicana de las instituciones. En los dos casos, se trata de tendencias que se viven sin ruptura real con el poder económico favoreciendo generalmente nuevas elites y sin realmente encabezar un proyecto emancipador.

La segunda tradición o tendencia, más desordenada, heterogénea y con elementos populares en su composición, se propone realizar cambios desde el Estado y es la fuente de gestos importantes del kirchnerismo, medidas concretas en Venezuela, o políticas sociales en Bolivia y Brasil que son continuadas por nuevos gobiernos, porque su sentido inmediato es electoral. Si una izquierda es liberal, la otra se acerca al nacionalismo y sin cambios profundos, muestra una rápida adecuación a las peores prácticas desde el poder, que determina después de su salida toda una dimensión política dirimida judicialmente.

A continuación presentaremos la situación de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, con sus matices que permiten completar un panorama parcial sobre la política sudamericana. En Argentina vemos un retorno del progresismo, con una figura que no se muestra cerrada a convocar a toda la familia peronista del poder, los pactos con empresarios y la búsqueda de un capitalismo sin choques, ni gestos populares bruscos, con que se caracteriza a la juventud peronista que asume continuidad con el peronismo socialista de los '70. El triunfo de Alberto Fernández, autodefinido como "liberal progresista" ([www.elobservador.com.uy](http://www.elobservador.com.uy)) con Cristina Kirchner como vicepresidenta, muestra que la llegada de la derecha al poder no instaaura un periodo definitivo. La estrategia de sacar a Cristina del primer plano, acosada por causas judiciales que podrían haberla llevado a la prisión durante la campaña, y la busca de un candidato que neutralize ese voto negativo, fue la salida que en

Bolivia no pudo producirse, y generó la crisis política que derivó en la renuncia de Evo Morales. También fue una dificultad en Brasil, con la insatisfactoria gestión de Dilma Rousseff, desde el punto de vista del propio partido, como factor que contribuyó a la derrota.

Después del Impeachment y prisión de Lula, la situación en Brasil es opuesta a la Argentina, anunciando una posibilidad para varios países de la región. La derrota del progresismo se da con la aparición de un nuevo líder con apoyo popular, esta vez de derecha. La falta de un despegue económico, el desencanto político generalizado que retrae la población a un cotidiano alejado de las cuestiones políticas institucionales, marca un contraste con la movilización de argentinos, bolivianos y chilenos, donde se respira política prácticamente en cualquier conversación. Bolsonaro arrebató a la izquierda el lugar de canalizar políticamente la indignación.

Derecha oscurantista, neoliberal, militarista, en Brasil; progresismo neoliberal, de explotación minera pero derechos humanos y políticas de inclusión, en Argentina; e Impasse en Chile y Bolivia, sin horizonte de solución electoral, en el primero, y con una promesa de Convención Constituyente que para muchos, y mirando la experiencia de Bolivia, solo parece postergar el problema. Horizonte electoral para el retorno del MAS, en Bolivia, pero sin Evo Morales, y con una derecha que ni lenta ni perezosa ya está ejerciendo el poder.

A continuación recorreremos las coyunturas recientes de estos países como piezas de un cuadro político latinoamericano común, que se encuentra en movimiento, pasando por cambios traumáticos, fin de ciclos y reconfiguraciones que nos permiten componer un mapa político de dificultades y alguna posibilidad.

### **Brasil**

El proceso brasileño tuvo un punto de inflexión en junio de 2013. Hasta entonces, había hegemonía política del Partido de los Trabajadores, aunque debe aclararse que este nunca obtuvo la mayo-

ría congresal y, desde el primer gobierno, fracasó en el intento de crear una base automática de apoyo, con el escándalo del *Mensalão* (sobornos mensuales a políticos de distintas fuerzas para garantizar ese apoyo). Sin este apoyo, el PT cerró una alianza más costosa en términos políticos, configurando un acuerdo de co-gobierno con el PMDB, partido que nace como oposición autorizada durante la dictadura (cuando el resto de los partidos era proscrito) devenido en contenedor de caudillos regionales, familias del poder y candidatos del sistema, con mandatos comprobables y espacio para invertir económicamente para la elección de una banca o una alcaldía en algún lugar del país.

Esta alianza con Dilma Rousseff se tradujo en el acuerdo electoral que llevó a Michel Temer a la vicepresidencia del Estado y presidencia del congreso por dos mandatos (2010-2014, 2014-2016), interrumpido el segundo por destitución, dejando el gobierno en manos del hasta entonces partido aliado, que llevaría adelante un gobierno conservador, aunque sin grandes rupturas en lo establecido hasta entonces.

Sin mayoría propia, en un sistema mixto entre presidencialista y parlamentarista que exige pactos, el PT tenía popularidad ante la sociedad y capacidad de encabezar una línea política, que fue la progresista. El PT, había nacido como herramienta de los trabajadores contra la dictadura, en la defensa de sus intereses de clase, y expresión de una izquierda que tenía como horizonte la revolución brasileña, pero terminó administrando el capitalismo brasileño en época de crecimiento y bonanza. Los bancos del Brasil fueron los que más ganaron en la historia reciente mundial, el Estado transfirió recursos inconmensurables para grandes empresas, los empresarios amigos del poder construyeron fortunas con créditos estatales y se expandieron creando grupos monopólicos o multinacionales, con negocios facilitados desde el gobierno.

Habría en los años del PT una expansión universitaria y del sistema gratuito de salud, pero se estaría lejos de la revolución en educación y salud necesaria para que el país pudiera contar con servicios de calidad al alcance de todos. En lugar de eso, los recur-

sos del país siguieron la lógica de un poder político subordinado a los mercados. El Estado brasileño lideró también la misión de paz en Haití, que sirvió de ensayo para desarrollar después, en Río de Janeiro, una ocupación militar de las favelas, desde la lógica del control de la pobreza con métodos militares. Se expandió el encarcelamiento y las muertes violentas alcanzaron cifras de países en guerra. A pesar de la retórica del gobierno, que hablaba de decenas de millones de pobres accediendo a la clase media, la inclusión social quedó en el plano del consumo que se sintió en las clases populares, con compra de autos, electrodomésticos, construcción, con posterior alto nivel de endeudamiento.

Diez años de gobierno desde 2003, cuando asume Lula da Silva, fueron el periodo al que hoy se refiere como lulismo: crecimiento con inclusión, mientras la gobernabilidad neoliberal daría ganancias sin precedente para el sector financiero, en un capitalismo de matriz exportadora que encontraría, como en toda la región, abultados ingresos con el agronegocio, la minería y otros recursos naturales. En 2010 asume Dilma Rousseff, su anterior ministra de minas y energía, y después *Chefe da Casa Civil*, especie de ministro articulador, a cargo del PAC, Programa de Aceleración de Crecimiento, a cargo de obras por todo el país, incluyendo la polémica represa de Belo Monte, cuyas empresas concesionarias financiarían las siguientes elecciones y que es un monumento de destrucción y hoy amenaza un gran río, después de haber destruido para siempre la vida de comunidades tradicionales e indígenas desplazadas de sus territorios. La obra sería un símbolo, por la destrucción, el costo, y la falta de retorno y funcionalidad (Pinto, “Belo Monte vai Quebrar”).

En 2013 el aumento de veinte centavos de Real en el precio del transporte urbano en las desataría un levantamiento popular en cientos de ciudades que mostraría el descontento latente. Se iniciaría en São Paulo, gobernada por Fernando Haddad, del PT, pero se expandiría por todo el país. La oposición a una causa dependiente de diversas administraciones en todas las grandes ciudades, mostraría un rechazo a toda la clase política, en sus diver-

sas administraciones, con repercusión nacional, que expresaba un desgaste del PT, pero que no se limitaba a ello, era generalizado. La lógica de las protestas era de expansión sin dirección, permitiendo que se sumen a ella sectores diversos y heterogéneos, con diferencias expuestas y sin síntesis ni dirección unificada. La izquierda saludó estas protestas, pero hoy se fortalece la mirada de que favorecieron la llegada al poder de Bolsonaro, encontrando más bien la idea de que las mismas fueron manipuladas y con signo de derecha (Forum, “Lula acusa...”).

En 2014 llegaría la copa del mundo, dejando un lastre de corrupción para la construcción de mega estadios en estados de gobiernos aliados, perdón fiscal a la FIFA, en la línea de la política nacional de transferencia de recursos para los mayores empresarios, junto a la idea de que la crisis se resolvería apoyando las empresas grandes con recursos estatales, con perdones de deudas (notable, en la expansión de la frontera agrícola) créditos billonarios para empresas líderes que buscarían transformarse en multinacionales, con una expansión de empresas constructoras, de alimentos y minerales para África, América Latina y el mundo (Lupion, 2016).

El gobierno buscaría recuperar el terreno perdido con un mensaje de unidad y fuerza de la nación llevado por el fútbol y un Brasil que se mostraría al mundo como potencia, y así comenzaba a ser reconocido. La derrota de Brasil por 7 a 1 en la final del mundial compone un mal cálculo en que los estadios se volvieron en escenarios donde la clase media alta, con banderas de Brasil, silbaba a la presidenta, quien, por otro lado, encarcelaba activistas contrarios al evento, que había dejado un legado de desalojos, prohibición de venta ambulante, corrupción y chauvinismo (Schavelzon, 2014).

El PT estaba contando las horas, pero no lo sabía. Después del mundial todavía Dilma conseguiría reelegirse. El dinero de la campaña vendría de la más destructiva obra imaginable. Dilma ganó apelando a la urgencia de frenar a la derecha (del PSDB, Aécio Neves) logrando movilizar alto porcentaje de voto crítico de Dilma, que era convocada a impedir un gobierno de ajuste y corte de derechos. A poco tiempo de asumida, con un ministro de economía que había

participado en la formulación del programa de la oposición (el banquero Joaquim Levy), Dilma iniciaría un fuerte ajuste de austeridad, corte de derechos, en una política que haría retraer la economía.

Derrotada en las urnas la derecha tradicional, liberal, pero de origen socialdemócrata, se activa la movilización y reorganización de fuerzas políticas de oposición al PT, que concluiría con la elección de Bolsonaro. En 2015 llegarían protestas multitudinarias pidiendo el impeachment de Dilma, que llegaría a tener una aprobación de menos de 5%, según las encuestas de sondeo de opinión sobre aprobación, y perdería el apoyo del congreso, incluso del PMDB, que en marzo posicionaría a Temer, suspendiendo a Dilma en un juicio político. El PT hablaría de golpe, por carecer de un claro crimen de responsabilidades en la acusación necesaria para iniciar el proceso de destitución, que duraría algunos meses. Pese a la fuerza de la narrativa política, en las elecciones municipales de poco después, el Partido de los Trabajadores volvería a construir alianzas electorales con la oposición del PMDB que la había traicionado, votando por la destitución de un gobierno del que Temer era articulador político. El partido mostraría su vocación de partido del poder, radicalizando discurso, una vez fuera del gobierno, pero con una lógica alejada de la movilización, imposible desde movimientos convertidos en dependientes de fondos estatales. El partido buscaría polarizar el electorado, manteniendo presencia institucional con alianzas con partidos del sistema, y gestiones regionales persistiendo en los consensos neoliberales, e incluso conservadores (Esquerda Diario, 2019).

Desde los medios progresistas de Latinoamérica, la situación del Brasil fue totalmente desinformada. En los diarios leídos por el progresismo, columnas de opinión construyeron un apoyo homogéneo de izquierdas oficialistas y antes disidentes. Fuera de Brasil se tergiversó la falta de apoyo que el PT obtuvo desde la sociedad frente al impeachment de Dilma y la prisión de Lula. El más de un millón de afiliados partidarios no se movilizó y tampoco lo hicieron los barrios populares donde en el pasado obtuvo electores. Tampoco los medios progresistas dieron a sus electores elementos importantes

para entender los procesos judiciales a los que se sometió Lula y otros dirigentes del PT, incluyendo las delaciones de empresarios y políticos donde se puso en evidencia la promiscuidad del poder con empresarios y grandes empresas contratistas del Estado.

El gobierno de Bolsonaro llega con resonancia (Tadei, Bulamah y Schavelzon: 2020) por la radicalidad reaccionaria de sus discursos, que funciona como señuelo de atracción políticamente incorrecta, mientras fortalece el orden y avanza contra derechos. En el poder, el bolsonarismo atendería los sectores económicos, del agronegocio, de los bancos, con más rigor y sin ambigüedades, incluso avanzando contra las organizaciones sindicales, y sin encontrar resistencia. La desmovilización muestra apatía, concentración en una política mediática electoral y de líderes, que va aceptando como normalidad un nuevo gobierno que en lo político no consigue construir una base de apoyo leal, ni fuerzas partidarias que le garanticen sustentación. Sin oposición organizada, Bolsonaro podrá hacerse con la reelección, mientras las consignas de enfrentar el fascismo no logran adherencia ni movilización contraria.

La apuesta de Bolsonaro es de destrucción institucional, desmonte, avance contra todo que impida negocios, abriendo siempre que sea posible una disputa con los símbolos de la izquierda, por ejemplo, en política cultural, defensa del medio ambiente o de derechos laborales. Hay algo de desgobierno como principio de la forma de gobernar de Bolsonaro: tornar al Estado cómplice de crímenes y abusos que debería controlar. La agenda de Bolsonaro es la de banqueros, empresarios del agronegocio, pastores evangélicos, fuerzas de seguridad. Este poder ya era atendido en sus demandas por el PT, Dilma no recibía víctimas de violencia policial, líderes ruralistas fueron premiados con titular de ministerio y perdones de deudas por deforestación, se iniciaron ajustes y reformas laborales más suaves, pero en la misma dirección. No había, en el progresismo, una oposición política real a lo que hoy gobierna. Temer, y después Bolsonaro, radicalizan esta dirección, y anulan cualquier contrapeso o ambigüedad interna que pudiera aminorar la marcha de ese rumbo.

En el contexto latinoamericano, el bolsionarismo se muestra como posibilidad que se ubica en el quiebre de representatividad, en contexto de crisis y junto al fracaso y derrota de la izquierda. El proyecto que defiende es el neoliberal, pero articulado políticamente de modo de superar las dificultades políticas del neoliberalismo. Es una respuesta diferente al mismo problema que señalan las calles: la insuficiencia de las instituciones, el deterioro de las condiciones de vida, el descrédito en la política. Pero si las calles buscan algo más allá del neoliberalismo, el bolsionarismo lo implementa, como fuerza estatal que interviene facilitando negocios empresariales, conectando estructuras políticas con dinámicas de cartel, y movilización de agendas conservadoras articuladas por sectores de las fuerzas de seguridad, iglesias pentecostales y grupos anticomunistas o de poder local, como redes mafiosas que, al igual que el uribismo y el fujimorismo, buscan control conservador de la sociedad y el Estado.

Donde parece que la rapiña es la única norma que organiza las prácticas, la asociación con milicias y apropiadores de tierra deja la idea de que el plan de gobierno es que los negocios asuman el control, incluso donde esto va en contra de la ley, como en la destrucción de la amazonia, con robo de madera, minería ilegal y avance de la frontera agrícola, protegidos ahora por el Estado. No se trata entonces de una dictadura que impone una ley con mano dura, sino más bien el libre arbitrio del lucro desmedido, combinado con cambios legislativos que flexibilizan la economía y eliminan derechos.

La izquierda, en este contexto, parece imposibilitada para salir de su modo de funcionamiento anterior. El repudio generalizado al bolsionarismo se transforma en una expresión cultural de complicidad progresista, pero no en organización, movilización, desobediencia del Estado que comanda. La figura de Lula da Silva, como mesías antibolsonarista, se presenta como límite para la construcción de una izquierda anti sistema. Más bien la izquierda se ampara en la Constitución (redactada por las elites), la democracia e instituciones del orden.

El shock Bolsonaro neutraliza el Partido de los Trabajadores, que pierde la máquina estatal, gana apoyo anti Bolsonarista, pero se desdibuja sin ser más administración viable, opción de gobernabilidad, ni izquierda de lucha y resistencia, lugar abandonado con la llegada al Estado, junto con una constelación de sindicatos y movimientos sociales que después de haber accedido a financiamiento estatal no encuentra un camino de vuelta hacia las calles. La izquierda disidente del PT, que por años representó una posición crítica, tampoco se vuelva a la protesta, y más bien se asimila al lugar de la gestión, con perspectivas de reemplazar el mismo papel que ocupó la izquierda estatal ahora desplazada, pero con la difícil situación de todavía convivir con la misma y coincidir en la mayoría de las posiciones, fuera del contexto político en que nace y siempre existió.

Mirando más a la Argentina de Alberto Fernández que al Chile del levantamiento contra el modelo, la izquierda se lamenta sin ensayar una renovación, sin encontrar un modo de funcionamiento lejos de las instituciones, sea en la construcción de poder territorial autónomo o en la organización social de lucha y resistencia contra el sistema. El deterioro político y la amenaza concretada de derechización reinstaura a Lula da Silva como principal opositor, sin que los balances críticos de su experiencia en el gobierno puedan ser retomados.

## **Bolivia**

La llegada al gobierno de Evo Morales, después de la elección de diciembre de 2005, reorganizó el sistema político boliviano. El apoyo inédito mostraba que no sería con el tradicional juego electoral que las fuerzas desplazadas de la democracia boliviana recuperarían el espacio perdido. La agenda de la autonomía regional (de los departamentos), impulsada por el poder tradicional de Santa Cruz, se adecuaba a esta nueva necesidad de los sectores del poder político y económico desplazados. Mientras los viejos partidos,

MNR, MIR, ADN se retraían o desaparecían por no poder conservar personería, la oposición se organizaba en PODEMOS, con cuatros de la derecha de todo el país, pero con comando desde Santa Cruz y la Media Luna, donde se conquistaron gobernaciones y había espacio para conquistar una base social.

Aunque era una agenda previa a la llegada del MAS, que ya se había mostrado con capacidad de movilización durante el gobierno transitorio de Carlos Mesa, la demanda de Autonomía se convirtió en una disputa estratégica en tiempos del MAS. Antes de ver su capacidad para bloquear la Asamblea Constituyente y amenazar el propio gobierno, era una agenda perfecta para un bastión opositor con capacidad electoral nacional limitada. El considerable aumento de recursos económicos derivados de descubrimientos de gas en los años anteriores, se debería controlar regionalmente, en contraposición de una estructura unitaria de organización del país, que ahora sería comandada por un partido formado por sindicatos campesinos. Era una agenda para una oposición retirada a la región, pero también lo que permitía movilizar a la población de la Media Luna, sin identificación con el nuevo gobierno nacional. La disputa política partidaria dejaba atrás las viejas identidades y se desarrollaba en un nuevo campo de fuerzas.

Hasta la reelección de 2009, después de aprobar la nueva Constitución, lo que impedía que la derecha con poder de movilización recuperara el control del gobierno era fundamentalmente el apoyo electoral masivo de Evo Morales. En 2008, después de que la Media Luna iniciara un proceso de desconocimiento del Estado central, con referendos departamentales autoconvocados que aprobaron la autonomía de facto, un referéndum revocatorio en que Evo Morales se impuso por el 67.4% permitió neutralizar la oposición y consolidar el poder en manos de Evo Morales, consiguiendo instalar la negociación con la oposición de las gobernaciones opositoras y del congreso, para aprobar la nueva constitución plurinacional, aunque incorporando buena parte de las demandas opositoras, y todos sus vetos, incluyendo el que prohibía la reelección indefinida.

La izquierda necesita más que la derecha para gobernar. Necesita un apoyo incontestable. Y el MAS era un partido de izquierda, con cuadros de esta proveniencia. Fue inclusive un intento de superar la forma partido, con el modelo partido-movimiento, con candidatos escogidos por las bases de los sindicatos campesinos de todo el país. También habría “invitados” y hombres del poder que serían parte del gobierno. Pero el desplazamiento de los partidos anteriores fue un movimiento hecho desde la sociedad, con una herramienta política que expresaba de hecho las demandas que habían surgido en luchas y en la calle. Por eso sólo sería exitoso si mantenía el apoyo democrático mayoritario.

Rápidamente el partido MAS viviría mutaciones, convirtiéndose en una entidad centralizada, alrededor de los cuadros de gobierno, no del partido ni de los sindicatos que lo componen, y con agendas que no serían las de las calles. El proyecto se apoyaría en publicidad y marketing electoral convencional, y las agendas nacidas de luchas sociales se reemplazan por mensajes destinados a convencer a la clase media urbana. Esto reflejaría o acompañaría una continua incorporación a las filas partidarias (o de candidatos a cargos de gobierno) de celebridades, actores de la política tradicional con apoyo clientelar en regiones, mientras al mismo tiempo se iban perdiendo apoyos iniciales de organizaciones sociales, de la juventud, de sensibilidades anti sistema.

Junto con la consolidación del poder y la aceptación de la máquina electoral, del control de la justicia y otros poderes, el gobierno buscaría aliados empresariales, y afianzaría vínculos con la oposición de los primeros años de gobierno, el sector ganadero y del agronegocio de Oriente. Sería un acercamiento por mutuo interés, interrumpido abruptamente cuando en el contexto de la denuncia de fraude electoral –después de la elección de octubre de 2019–, el comité Santa Cruz que es cercano al sector empresarial, aunque con conducción de otros sectores, retomaría con Camacho el encabezamiento de las protestas nacionales contra el MAS, surgidas en todo el país de forma espontánea e ideológicamente transversal.

El camino adoptado por el MAS en estos años estaba alineado con el del progresismo en toda Sudamérica: políticas sociales, aumento del consumo popular, impulso del desarrollo extractivista con inversores internacionales, y administrar los ingresos de hidrocarburos. Las políticas económicas de largo alcance serían acordes a las necesidades del agronegocio, de la gran minería, no de la reforma agraria, ni de la reestatización, menos todavía de la descolonización del Estado, fuera de agenda y horizonte. El gobierno del MAS haría una política de intervención y propaganda a partir de la llegada directa con bonos y donaciones a pequeñas poblaciones. La política indígena, plurinacional, del Buen Vivir, que permeó la constituyente, quedaría atrás con una identidad desarrollista y soberana que, sin embargo, no haría mucho más después de mayo del 2006, en que por decreto se aumentarían las retenciones a empresas de petróleo y gas, del 50 al 81%, la base de la buena recaudación en años posteriores.

Sin grandes transformaciones, pero con relativo éxito en llegar a la clase media baja, y sin sobresaltos económicos de otros países, en base al colchón del gas, el gobierno del MAS caería por cuestiones políticas, no económicas. El talón de Aquiles, que la oposición sabría aprovechar, sería la incapacidad de resolver la sucesión post Evo Morales dentro del MAS. Nadie sabrá nunca si una renovación en la candidatura presidencial del MAS realizada a tiempo hubiera podido permitir una continuidad, con un poder que se mostró con los pies de barro. Aunque sea posible su retorno en el corto plazo, incluso con renovación interna, por el apoyo que mantiene y la falta de unidad y conducción unificada de la oposición, la renuncia de Evo Morales el 11 de noviembre, y su exilio posterior, criticado desde abajo en Bolivia, parece ser un fin, con aceptación de la derrota. A pesar de la retórica inflamada y denuncia de golpe, la aceptación del escenario electoral y de nuevo gobierno, incluso con votaciones de la mayoría parlamentaria del MAS, parece anunciar ese destino. De ese modo, un nuevo ciclo comenzará en la reconversión del MAS en partido de poderes locales y oposición.

El levantamiento contra Evo Morales en octubre y noviembre de 2019 se produce entonces en el contexto de la insistencia en candidatearse a una segunda reelección (en el marco del Estado Plurinacional), prohibida por la constitución y que había sido rechazada en un referendo de reforma constitucional impulsado por el gobierno del MAS, en 2016. La popularidad de Evo Morales en elecciones anteriores fue deteriorándose, y la fragilidad legal que permitió la candidatura, en un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional presionado políticamente, no impidió el malestar, que generó amplias protestas en todas las ciudades una vez interrumpido el conteo electoral, con posterior radicalización muy considerable de la tendencia estadística de la diferencia entre votos, que generó sospechas de fraude y llevó a que el gobierno convocara una auditoría de la OEA.

Estas protestas unificaban el desgaste político pronunciado después del referéndum, cuyos resultados Evo Morales no aceptó realmente, argumentando el recurso de la oposición a *fake news*. Cuando la OEA recomienda la repetición de las elecciones, el cerco comienza a cerrarse contra el gobierno. Había fuertes movilizaciones desde el 21 de octubre, Santa Cruz estaba en paro cívico que iría a declararse también en La Paz, la policía estaba amotinada negándose a continuar con la contención de las protestas. La oposición que denunciaba fraude sospechaba de la OEA, por esta haber dado visto bueno a la candidatura de Evo Morales, el MAS convocó a la misma, pero sin un informe que le permitiera declararse vencedor. Su suerte estaba jugada. La renuncia presidencial, vicepresidencial y de toda la cadena sucesoria en el parlamento, vino horas después de una aceptación de nuevas elecciones. De haberlas, volvería la discusión sobre si Evo Morales podría candidatar, pero futuras protestas masivas parecían infranqueables.

Hubo amenazas de grupos opositores para forzar renunciaciones, pero también un comando desde el gobierno en esa dirección, buscando crear un vacío que generara aclamación por Evo Morales, que no ocurrió. Hubo quite de colaboración del ejército, que sugirió la renuncia y se negó a reprimir sin garantías que evitaran

posteriores procesamientos, como ocurrió en 2003. El general Kalimán, considerado evista, habría sido presionado por tropa y comandantes para no intervenir de forma violenta contra la denuncia de fraude, y para recomendar un paso al costado de Morales, que fue realizado en nombre de pacificar el país.

Mientras el gobierno buscaba recobrar el control en un conflicto por el resultado electoral, la derecha cruceña avanzaba hacia el gobierno. El MAS allanó el camino creando un vacío de poder que fue aprovechado por quien estaba en posición de asumir la presidencia del Senado. El gobierno negociaba un segundo turno cuando la anulación de las elecciones era irreversible. La confusión mostraba grupos leales al gobierno gritando en apoyo del ejército y contra la policía, que protagonizaba un nuevo episodio del histórico enfrentamiento entre ambas fuerzas. Al mismo tiempo coroneles presionaban al comandante en jefe contra el gobierno.

Se habla de altas sumas de dinero para el comando del ejército desde ambos sectores enfrentados. El MAS esperaba controlar esta variable, que había sido determinante para consolidar el poder años anteriores. La sugerencia de que para controlar la situación sería necesaria una renuncia presidencial, a la que también la Central Obrera Boliviana se había inclinado, puede verse como determinante de debilidad institucional para enfrentar una pueblada, pero también, que la situación había llegado a un punto de irreversibilidad definitivo. El ejército no tomaría el poder, pero no intervendría militarmente contra grupos de la oposición y dejaría al gobierno sin alternativas para sobrevivir.

Hay relatos de negociaciones que involucraron la salida de Evo Morales, la defensa de su vida, a la que él se refiere en entrevistas, y la aceptación de un nuevo gobierno por parte del MAS, con mayoría en el parlamento, hecho crucial que se da en paralelo a la denuncia de golpe por parte del gobierno renunciante. Hay todavía vacíos no entendidos, sobre la estrategia que llevó a la renuncia de toda la sucesión constitucional, que podría haber abierto las puertas a un gobierno masista de resistencia, o a un doble poder,

como en Venezuela. El gobierno del MAS se muestra torpe al dejar el resultado de la elección en manos de la OEA.

Tampoco hay claridad sobre la facilidad con que fue aprobada por unanimidad una ley que llamaba a nuevas elecciones y daba poder de hecho al nuevo gobierno, que podría haber sido cuestionado, por no haber nacido del voto mayoritario de la asamblea plurinacional, sino por autoproclamación. La oposición asume apelando a una ley de 2001 sobre vacío de poder y con la ausencia de los congresistas del MAS. De haber un bloqueo del parlamento por parte del MAS, la oposición estaba dispuesta a asumir de cualquier modo, en una escuela o iglesia, según han declarado. El papel de legisladores del MAS más dialoguistas fue importante. En enero se votaría la renuncia de Morales y García Linera, extendiendo el mandato de parlamentarios hasta la elección de un nuevo presidente.

Si pensamos en Evo Morales como depositario de un mandato popular, esta derecha desplaza el gobierno del MAS de forma ilegítima. Tuto Quiroga y otros opositores de PODEMOS y de la derecha regional acceden al gobierno sin mandato electoral. Aunque el MAS tenía su legitimidad para candidatear a Evo Morales cuestionada, logra pasar a la defensiva apelando al discurso del golpe, dejando atrás la discusión sobre el fraude, aunque con idas y vueltas en declaraciones sobre su ausencia, posible retorno inmediato, formación de milicias, o vigencia de su presidencia incluso desde su refugio en Argentina, con el argumento de que su mandato concluiría el 22 de enero, y de que su renuncia no había sido legalmente aceptada.

La denuncia de golpe se asume en la izquierda de Latinoamérica más allá de Bolivia. Tiene mucha repercusión la entrada al Palacio de gobierno del líder cívico Camacho con la biblia, mientras el segundo en la elección, Carlos Mesa, iba siendo desplazado. Hubo violencia en las calles fomentada por quien se oponía a la renuncia de Evo Morales, buscando alimentar una crisis que, ante un vacío de poder, pudiera llevar a la reconducción de Morales al gobierno, como Chávez en 2002. Hubo amenazas a funcionarios con presión por renuncias, en la misma dirección en que desde el comando

político se ordenó una renuncia de legisladores, desobedecida más allá de la cabeza gubernamental del Estado.

La recomendación de renuncia por parte del comandante de las fuerzas armadas, William Kalimán, transforma la cuestión electoral en cuestión del poder y, sin embargo, no es blanco de la crítica de Evo Morales, quien mantiene coordinación después de la renuncia. Kalimán habría actuado conteniendo la posición de otros militares del comando supremo, en un contexto de movilización y repudio al resultado electoral que permitió volver natural la desobediencia. El tribunal constitucional, anteriormente avalando la candidatura de Evo Morales, rápidamente avala el mecanismo con que es nombrada una nueva Presidenta, ante un vacío constitucional acerca de la situación existente. Sin presidencia de las cámaras, la Constitución de 2009 no establece procedimientos y la resolución fue sorpresiva, dejando sin efecto la estrategia del MAS, elaborada ya en extremo y ante desorganización por la salida del país de Evo Morales.

El ejército tampoco tiene participación en el nuevo gobierno que asume un papel de transición, y no de dictadura de facto, aceptando el llamado a elecciones con participación del MAS, aceptada por la nueva corte electoral, elegida en consenso entre el MAS y su oposición, en el gobierno. El presidente de esta corte es académico, sin vínculo con la derecha regional, y la convocatoria a elecciones para mayo de 2020 otorga el alineamiento de todos los actores con la resolución del impasse por vía de elecciones. Evo Morales indica un binomio electoral formado por su ministro de Economía, presentado como autor del Milagro Económico Boliviano. No proviene de la línea dura ni más radical, transmitiendo una imagen de moderación similar. La que Haddad en Brasil y Alberto Fernández en Argentina buscaron capitalizar, volviendo al lugar de conciliación, liberalismo y falta de enfrentamiento con el poder económico, que caracteriza al progresismo.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> El candidato a vicepresidente sería David Choquehuanca, ex canciller. Incluirlo en el binomio buscaría atender el mandato de las organizacio-

Si pensamos que el MAS es producto de movilizaciones y bases sociales, verdaderos depositarios del mandato popular, Evo Morales tiene también que prestar cuentas relativas a su insistencia en quedarse en el poder, colapsar los vasos comunicantes con lo que en algún momento se propuso como instrumento político de los pueblos, y toda una serie de cuentas que van quedando atrás, donde se incluye represión, intervención, aparateo de organizaciones sociales en función de una agenda estatal, a veces confundida con expansión capitalista y desarrollista con la oposición de antiguos aliados en las ciudades y, notablemente, indígenas. Con generosidad, Evo Morales puede verse también como testimonio de la fuerza indígena y posibilidad de la izquierda de mantener una voz crítica en un mundo capitalista, como testimonio de que un día ese poder de abajo podrá encontrar caminos más concretos para imaginar una ruptura.

En Bolivia todavía no hay un discurso unificado entre los que argumentan a favor de un escenario golpista. El carácter ilegítimo del nuevo gobierno, la desobediencia de las fuerzas de seguridad, las masacres de Senkata y Sacaba, el no reconocimiento del triunfo electoral de Evo por parte de la sociedad movilizada. En favor de la idea de que se trató de una rebelión popular (Zibechi, 2019) la situación se asemejaría a la caída de De La Rúa en Argentina, en diciembre de 2001, cuando, a la caída del Presidente, en una rebelión social, le sigue un gobierno de transición encabezado por un senador peronista. Lo cierto es que es golpe y revolución pueden nombrar sucesos similares. La composición social de las protestas y su identidad parecen ser cruciales para esta definición. En el caso de Bolivia quedan algunos asuntos en abierto, que será materia de discusión historiográfica en el futuro.

---

nes sociales que habían votado nacionalmente por su postulación como Presidente. Si bien demostró lealtad en momentos en que mantenía posiciones enfrentadas con el rumbo del gobierno, representa potencial autonomía en relación a Evo Morales, y un vínculo propio, no derivado, con las comunidades Aymaras y sindicatos campesinos.

La falta de legitimidad del nuevo gobierno de Jeanine Áñez se impone sin iniciar una fase conservadora estable. Como Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil, la llegada de la derecha aprovecha el fracaso del progresismo y el rechazo a sus líderes en amplios sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, Lula, Cristina Kirchner y Evo Morales mantienen fuerza considerable. El triunfo del kirchnerismo en 2019, frente a un macrismo que permanece fuerte, muestra más bien un contexto inestable. El MAS, con mayoría parlamentaria, podrá ganar las próximas elecciones, o aceptar esta vez la derrota, manteniendo una fuerte presencia en el parlamento, evitando su debacle definitiva si abre procesos de renovación y vuelta a los orígenes, quizás como nuevo actor redimensionando su lugar en las instituciones.

Bolivia se encuentra en una transición hacia no se sabe qué. Post evismo, muy probablemente, sea a partir de un nuevo gobierno opositor, o de un gobierno del MAS con nueva configuración, y el afloramiento de fuerzas del MAS antes controlados por la cúpula de gobierno. El nivel de retórica y simbología hiper-inflamados impiden una incorporación del MAS al escenario institucional liberal democrático, a pesar de la intención conciliatoria, de actitud permisiva con el poder económico nacional y extranjero y la falta de proyecto de cambio estructural afectando intereses de los poderosos. Hay elementos internos al MAS que tienden a esa integración, como da cuenta el accionar de la conducción congresal del MAS post salida de Morales. Otros sectores se debaten entre la radicalización y, como en Argentina o Brasil, una tendencia de evismo mesiánico con culto a la personalidad, reñida con el republicanismo liberal, en el pleno de la gestualidad e imaginario.

Si bien el centro gravitacional del gobierno, de su actual papel desde el parlamento en la transición, y sus candidaturas, lima las asperezas y ubica al MAS hacia el centro, tendiendo a volverlo un partido democrático de administración sistémico, el mismo debe su existencia a tradiciones de lucha e imaginarios nacidos de las tradiciones políticas que dan vida al proceso boliviano. Después de diez años de avance hasta el gobierno, y 13 años ejerciendo el poder, quizás sea

necesario un balance que ubique al MAS en la historia de Bolivia y en el marco de tradiciones y tendencias políticas que lo configuran.

El juego combinatorio de dos miradas, indianista y marxista, uniendo indígenas, campesinos y obreros, desde la tradición política altiplánica, entre 2000 e 2005 construyó un proyecto de ruptura, como lenguajes de resistencia disponibles. Desde el katarismo del movimiento campesino, un proyecto de descolonización, autodeterminación de nacionalidades indígenas, desde el marxismo una lucha de clases en que la discriminación se entendía como opresión, con toda la tradición minera y de lucha política que buscaba ir más allá de la revolución nacional. Estas dos miradas, que caracterizan al katarismo boliviano desde fines de los años 60, han venido ganando espacio primero en el sindicalismo campesino e influencia en la política nacional desde los años 90, y también en la comunicación e identidad del MAS (Schavelzon, 2013).

El centro que estructuró este proyecto como nuevo gobierno y gestión de un capitalismo periférico, buscando estabilidad y ganar elecciones, sin embargo, convirtió el marxismo e indianismo en lo que era posible gestionar: un bolchevismo que capturaba la energía colectiva deseante de un poder autónomo en un poder centralizado desde el Estado, concebido como instrumento de transformación y cerebro de un progreso que iría en el ritmo de lo posible. El indianismo, con su tradición comunitaria de poder distribuido, por su parte, mutaría en un caudillismo, al alcance de la mano también como energía de abajo que transmuta en el poder del líder, acorde a la tradición latinoamericana y boliviana del nacionalismo estatal. El proyecto político de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, se integra como un gobierno más, expresando todos los límites de la izquierda y de la política del poder, y del Estado, construyendo por sí mismo las condiciones que determinarían su caída (Schavelzon, 2018).

En enero de 2020 se anuncia la fórmula del MAS que disputaría las elecciones de mayo. Evo Morales, desde Buenos Aires, desconoce el mandato dado a David Choquehuanca, elegido por la base del MAS en todo el país, y lo ubica como vicepresidente, dan-

do cuenta de su lugar en la estructura del MAS. En la presidencia ubica a Luis Arce, que al definirse como marxista vuelve a hacer resonar la tradición política donde se inscribe el MAS, como fórmula indianista y marxista. Lejos de ambos proyectos y visiones políticas, más que como reminiscencia lejana, se busca más bien un candidato a presidente que obedezca a Evo Morales, y que sea palatable para la clase media, para quien dirige un discurso moderado, como Alberto Fernández en relación a Cristina Kirchner, en Argentina, y que contrasta con denuncia del golpe de Estado, también refutada por la bancada del MAS, al aceptar las renunciaciones de Evo Morales y Álvaro García Linera, el 21 de enero, dejando de lado cualquier intento de resistencia y vuelta al origen, como partido-movimiento que nace para más que ser gestión capitalista.

Con mayoría parlamentaria, y declarando un triunfo electoral, habría espacio para disputa nombrando un nuevo gobierno. La falta de aliento para iniciar un periodo de movilizaciones, y la actitud de los legisladores y movimientos sociales de volver a la normalidad institucional, respetando las nuevas autoridades, llevan a que la crisis se dirima electoralmente, mucho más en la línea de incorporación del PT brasilero o el peronismo al sistema, que la voluntad de cambio que dio origen al MAS y que ahora se siente en las calles chilenas.

Entre el Estado y la comunidad, movimientos y partido, entre liderazgos fuertes que se articulan con institucionalidad burocrática y búsquedas de autonomía que alimentan utopías y memorias de ruptura con la modernidad, con el capitalismo y la República, péndulos y complejas articulaciones presentes en la sociedad y traducidas en la política dan lugar a un proceso abierto donde lo popular, la lucha de clases, las formas ancestrales y la inserción en el capitalismo actual continúan configurando un devenir.

## **Argentina**

Argentina vive el fantasma de un estallido social. El triunfo del kirchnerismo, en un frente con otros sectores peronistas, lo di-

sipa. Pero no lo elimina. En diciembre de 2018 hubo una fuerte movilización contra el macrismo, a partir de una reforma jubilatoria, considerada leve, con los padrones regionales. El propio Alberto Fernández aprobó una reducción de haberes más significativa al inicio de su gestión, sin movilización. La figura de Macri, de hecho, unificaba toda la sociedad organizada y permitió el retorno del kirchnerismo, cuatro años después de derrotados por un candidato que parecía imposible de triunfar a nivel nacional y, al mismo tiempo, en un triunfo del kirchnerismo que después de la elección anterior, parecía inviable.

La tensión que la elección presidencial ayuda a canalizar, sin embargo, tendría fecha de validez, y sin solución de la crisis inflacionaria y recesión es posible que los que no votaron por el retorno del peronismo, los que están en la línea roja de la pobreza, y los que vean a Alberto Fernández como un mal continuador del kirchnerismo, podrán volver a las calles, como en diciembre de 2001, cuando la población destituyó el gobierno desde las calles.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo una gran movilización popular que derribó un gobierno en crisis. Sería la inflexión para una nueva fase política. Desde las calles, en se decía adiós al periodo que instauró Carlos Menem, de neoliberalismo, ajuste, privatizaciones, desempleo, alineamiento con EEUU y el FMI, que había encontrado continuidad en el gobierno depuesto de De La Rúa, que convocó a Domingo Cavallo, ministro de Economía y símbolo del menemismo, para imponer nuevamente políticas impopulares que indignaron a la clase media, y mantuvo una amplia red de organizaciones sociales de desempleados, docentes y otras categorías en movilización.

No sería el fin del neoliberalismo, pero sí un cambio de postura en relación a los mandatos de los mercados, y la llegada al poder de un sector progresista que entiende al Estado como actor político central en la compensación de las desigualdades, y que levanta símbolos discursivos de soberanía nacional, derechos humanos y progresismo.

De La Rúa había llegado al poder a través de una coalición entre su partido, la centenaria Unión Cívica Radical (UCR), y el FREPASO, de

Chacho Álvarez, que había renunciado poco antes a la presidencia frente a un escándalo de corrupción que involucraba a un hombre de su partido. El FREPASO era un nuevo partido con perfil progresista que expresaba claramente la oposición al menemismo, había sido fundado por disidentes peronistas del congreso, que también articularían un nuevo sindicalismo no amarillo, que crecería en esos años. El FREPASO no había podido vencer a Menem en 1995, y en 1999 lo haría en alianza con un partido desprestigiado para el votante, pero con estructura nacional. El radicalismo haría lo mismo con Mauricio Macri años después. En 1999, sin embargo, se acercaban a la fuerza que podía prometer una alternativa al neoliberalismo, pero mantenía el rumbo económico. Ese era el contexto de un acontecimiento político que redefiniría el juego con el canto de "Que se vayan todos!" como rechazo a toda la clase política y como expresión de los piquetes y cacerolas que ganaron protagonismo.

El senador Duhalde, del peronismo, asumiría para completar el mandato de la Rúa. Sólo en 2003 habría un presidente electo, Néstor Kirchner, que podría finalmente instalar un gobierno progresista. Aunque aliado de Menem desde el gobierno de una provincia, sabría implementar esa política, luego de que Chacho Álvarez no había tenido coyuntura política para transformar en gobierno. Las expresiones más radicales del 2001, que constituyeron asambleas barriales y llegaron más allá, políticamente, de las demandas más inmediatas, encontrando caminos de autonomía que cuestionaban el sistema y sus políticos, serían traicionadas. Pero las personas movilizadas apoyarían el kirchnerismo, que universalizaría los planes de ayuda social y avanzaría desde el Estado en apoyo de una agenda de derechos humanos que recogía las luchas post dictadura por la memoria y justicia respecto a los 30 mil desaparecidos.

Pero lejos de superar los 50 años de bipartidismo peronista y radical, intercalado con dictaduras, el sistema encontraba líderes con legitimidad. El kirchnerismo sabría encontrar formas de envolver a la población en disputas anti neoliberales, sin necesidad de rupturas. El peronismo siendo peronismo, pero reinventándose

en una línea con mucho contacto con lo que el PT haría en Brasil, y el Frente Amplio, en Uruguay, Alianza País en Ecuador. Chávez en Venezuela sería aliado, pero con otra construcción simbólica, socialista. El MAS en Bolivia se identificaría con ambos y también tendría su lugar propio, por el lado de la identidad indígena y la plurinacionalidad.

Visto desde el 2001, cuando parecían cuestionarse los límites de la política burguesa argentina, sea con sus matices republicanos, socialdemócratas, nacionalistas, radicales y peronistas, el desenlace parece conservador. A la luz de la extrema derecha populista de Brasil y el mundo, una cultura democrática progresista, incorporada en los partidos liberales, parece ser algo a valorar. El kirchnerismo se alinearía con la sensibilidad anti neoliberal de las mayorías estilizando las AFJP, no alineamiento con el FMI, enfrentando los exportadores de grano, o en los juicios contra represores de la dictadura. El kirchnerismo es, al mismo tiempo, la derrota de cualquier proyecto que podría aspirar a un quiebre no neoliberal.

El límite sería afectar los bolsillos de los poderosos, no se superaría un modelo de capitalismo con amigos empresarios del poder, y el modelo de empleo, crecimiento, desarrollo sería un consenso sin discusión. A pesar de movilizar lenguajes de lucha social y representación de los de abajo, la sucesión post cristinista, con Scioli, en 2015, y Alberto Fernández en 2019, ambos nacidos del menemismo o la Ucede, partido ultraliberal de derecha, buscaría sanar el quiebre interno del peronismo, entre progresismo y peronismo conservador, cerrando los espacios de disputa anti neoliberal, con cuadros más dialoguistas, quizás a excepción de Kicillof, nuevo gobernador de Buenos Aires, que expresa junto a La Campora, un cristinismo duro que remite a la izquierda peronista de los 70, actualizado como proyecto desarrollaste keynesiano.

A días de asumir, Alberto Fernandez declararía que la minería sería su fuente de recursos para que el país volviera a crecer. Poco después hubo una masiva marcha en Mendoza contra el gobernador, y se aprobaría una ley de minería que ponía en riesgo el agua de la provincia, incluyendo la viticultura, y reactivando luchas que

habían logrado frenar la minería, después de episodios de derrame de cianuro en yacimientos de la empresa Barick Gold.

Viendo el desfile de nombres del peronismo federal, los actuales funcionarios que fueron de la oposición al kirchnerismo en el pasado, y líneas políticas más conciliatorias que con Cristina, el triunfo frente a Mauricio Macri tiene importancia regional, como muestra de la posibilidad de retorno del progresismo, una vez desplazado por la derecha, como un fin de ciclo que no da lugar a otro bien consolidado. Aunque el macrismo junto al radicalismo conservan una cuota considerable de poder, y justamente por eso, vemos un escenario donde, en tiempos electorales, la oposición gana niveles de polarización excesivos, pero en tiempo de gestión los matices desaparecen, los hombres del poder administran y entonces los grandes desafíos, en el funcionamiento de un modelo injusto, quedan fuera de la discusión política cotidiana.

Argentina identifica el neoliberalismo en sus representantes más directos, Menem, Macri, con la oligarquía. El kirchnerismo y un postkirchnerismo más peronista son lo que se identifica como alternativa, y, sin espacio para una izquierda no peronista o de un peronismo de izquierda no kirchnerista, encontramos intelectuales, grupos políticos, líderes sociales críticos durante el kirchnerismo vueltos filo kirchneristas en momentos de definición. Igual que los votantes “críticos” del PT, en el juego político real, Lula o Kirchner representan la posibilidad de terminar con el macrismo, como si se tratara del fin del modelo neoliberal, o de Bolsonaro como si se tratara de frenar el fascismo desde un Estado social, de bienestar que de hecho nunca existió.

Volver al 2001 hoy sería criticar una economía preconizada y la imposibilidad de generar riqueza distribuida a partir de la industria nacional, las Pymes o la agroexportación. La izquierda existente ha tenido un crecimiento, pero no desde la conexión con luchas o caminos de emancipación, sino por haber aceptado el juego electoral, aprovechando el voto crítico y los desencantados del kirchnerismo por izquierda. Incluso una fuerte construcción política a partir de la economía informal, la CTEP, en el contexto de la disputa contra

Macri, se acercó al kirchnerismo y, así, como Boulos en Brasil con Lula, volvieron sus propias construcciones como superfluas al lado del progresismo, que se autorepresenta y licúa cualquier otro espacio de construcción opuesta a la derecha política.

## Chile

Chile ocupa hoy un lugar especial en el panorama sudamericano. Es donde las cosas están al mismo tiempo más abiertas y más cerradas. Donde hay algo ocurriendo del orden de lo imprevisible. Tampoco es posible dilucidar cómo se resolverá la sucesión presidencial en Bolivia: si estallará una revuelta en Argentina y si Nicolás Maduro podrá mantenerse en el poder. Pero en Chile lo imprevisible va más allá. Por un lado, la falta de caminos, la persistencia de esfuerzos de la clase política en cerrar lo que las calles abrieron y las dificultades de siquiera imaginar cómo sería una salida a la altura de lo que pide la población, es imponente. La presión que no cesa y la falta de eficacia de los mecanismos tradicionales, incluyendo líderes políticos, asamblea constituyente y represión, hacen de Chile también escenario de posibilidades, si no revolucionarias, al menos de laboratorio ahora post neoliberal.

Los manifestantes que desde el 18 de octubre ocupan las calles de Chile cantan “Chile despertó”, y eso quizás sea lo único cierto en un panorama donde la radicalidad de la calle, en un levantamiento que no cesa, no encuentra todavía canales de expresión en sentido de cambiar ese modelo ya destituido moralmente, ya sin posibilidad de funcionar con legitimidad y sin respuesta, aunque aún en pie y organizando la vida colectiva de la sociedad chilena.

La lucha estudiantil de 2006 y 2011 es un antecedente al que deben sumarse las fuertes movilizaciones de mujeres, la causa mapuche, con sus presos y defensa territorial, las pensiones miserables, de un sistema privatizado que se sufre en todas las casas de la clase media y baja, mostrándose evidentemente injusto, frente a un país gobernado por ricos y poderosos dueños de todo.

Como explosión derivada de acumulación en las luchas y la sensación de necesidad de hacer algo, la fuerza inicial y sostenedora de la revuelta fueron los adolescentes de colegios que, sin nada que perder, más allá de las clases, decidieron actuar esta vez contra un aumento del transporte, no aplicado al boleto estudiantil pero sí al del resto y, como ellos explicaban, al presupuesto de sus familias. Como en junio de 2013 en Brasil, el transporte, los adolescentes, la lucha, sin banderas partidarias, encuentra una forma efectiva de obtener visibilidad, en un contexto donde el trabajo es desorganizado. El costo del transporte afecta transversalmente a la clase trabajadora y, en tiempo de descentralización productiva, trabajo no organizado y precario, se constituye como lugar donde las personas están. La ciudad entera se constituye en espacio de confrontación con el modelo, y la represión estatal repercute con efectos que vuelve la protesta visible para indeterminados actores, afectando la circulación de personas y productos.

La protesta se inició el 18 de octubre de 2019, después de dos o tres días en que alumnos convocados por una cuenta de instagram de estudiantes militantes se congregaron en las entradas del metro del centro de Santiago para evadir los molinetes y no pagar el pasaje recientemente aumentado. Ese día, la policía reprimió brutalmente causando un efecto expansivo y produciendo la interrupción del servicio de transporte, generando protestas espontáneas que no pararían por meses. Días después de comenzar la Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, recibió un millón doscientos mil manifestantes, según cálculos que circularon. Al principio, por la renuncia de Piñera, los partidos de izquierda y sectores sociales y sindicales organizados, como el que encabeza la plataforma contra las operadoras privadas de jubilación, instalaron la demanda de una Asamblea Constituyente. La misma se volvió una propuesta formal a partir de acuerdos entre el gobierno con legisladores de la oposición, que en noviembre y diciembre aprobaron la convocatoria formal.

Lejos de que la Asamblea Constituyente respondiese y se sintiese como hija de las movilizaciones, quedó en evidencia el opor-

tunismo de los políticos y las limitaciones con que la misma fue programada. Convocada con el nombre de Convención Constituyente y atada a un referéndum que, en abril de 2020, determinará si su composición es mixta, con 50% de miembros del congreso, o con representantes enteramente electos para la misma, el nuevo texto constitucional deberá ser aprobado por dos tercios que, dado el comportamiento electoral de los chilenos, ciertamente dará poder de veto a los defensores del pinochetismo y del sistema neoliberal, mercantilizador de los servicios públicos, para no hablar del resto de constituyentes que también provendrán, por la dificultad de candidatear por afuera de los partidos, de las fuerzas que administraron y condujeron el modelo que hoy se busca impugnar.

En diversas votaciones, el congreso mostró límites, incluso en sus fuerzas emergentes, como el Frente Amplio, que además de negociar rápidamente con el gobierno, sin capacidad de traducir en este espacio la falta de legitimidad, permitió que mantuviera la iniciativa, incluso aprobando leyes de criminalización de la protesta, como la llamada ley anti capucha y anti saqueos, que llevaron a representantes de estas fuerzas a pedir disculpas por redes sociales. En diciembre la convocatoria a la Asamblea se convierte en ley dejando de lado la posibilidad de equidad de género, la representación facilitada de representantes indígenas y de sectores independientes por fuera de los partidos.

La crisis muestra movimientos tectónicos incluso en las instituciones y sistema político tradicional. Fueron comunes las rupturas de frentes, legisladores disidentes, discusiones internas al frente de derecha gobernantes, sin contar con episodios de repudio en las calles a los representantes de izquierda, además del llamado general a la lucha por la renuncia del Presidente, que comienza a ser vista con buenos ojos incluso por sectores empresarios y de derecha, que reaccionan con descontento ante la falta de estabilidad y orden social, con caída de toda actividad económica.

Especulando con un escenario constituyente, la fuerza de la derecha podrá imponer que el trabajo de la convención termine sin resultados. Podrá también aparecer una derecha moderada, no an-

clada en la defensa del pinochetismo y que busque acuerdos con la centro izquierda, en el sentido de lo que la política chilena produjo como posible (Portales, 2019), con partidos como el socialista y el comunista, aceptando los límites de un sistema que aparecía como inmutable, y que podrá rejuvenecerse devolviendo orden y normalidad, quizás a cambio de victorias solamente simbólicas. El resultado, decepcionante, o su falta, podrá generar espacio para algo nuevo que hoy no parece ser una fuerza partidaria o líderes de izquierda, y sí un avance de la extrema derecha, con el empresario Kast o un pinochetismo camuflado por años como derecha moderna y democrática, que mostraría su violencia constitutiva de forma directa.

La Asamblea Constituyente desplazó el pedido de renuncia de Piñera, de los primeros días de protestas, como demanda que apuntaba más allá del gobierno, buscando alcanzar al modelo. Esto pone a Chile en un lugar político diferente de los países vecinos. Bolivia discute la reelección de Evo, y la continuidad del MAS, Cristina y Lula, Macri y Bolsonaro es lo que se discute en lugar del modelo, en los distintos países, como si el proyecto político progresista o conservador, o neoliberal, dependiera de la visión política del Presidente. Lo que la crisis y movilización chilena muestra es una consciencia de la necesidad de ir más allá de lo que el progresismo partidario mostró desde el gobierno, como impotencia y carencia de capacidad para realizar cambios en ruptura con el armado pinochetista, que tiene su estructura validada en la constitución de 1981.

Sin respuestas desde arriba, ni capacidad de cerrar el proceso de contestación y avance en la movilización, la riqueza del momento chileno se mide desde abajo: barrios movilizadas, creación de asambleas en las ciudades, movilización persistente, semanal, con varias convocatorias de cientos de miles. Hay energía que hoy circula por los espacios políticos y de una política que baña relaciones familiares, de vecinanza y amistad. Las mujeres produjeron registros performáticos en denuncia de violaciones, machismo y crímenes de Estado, que recorrieron el mundo. Los estudiantes secundarios tuvieron una victoria en la interrupción de exámenes de admisión a la universidad. Los mapuche, en parte, exigen que no se los involucre

dentro de una coyuntura política chilena, sino en solidaridad con los castigados por el modelo, en una lucha de autodeterminación territorial y de enfrentamiento al capitalismo y Estado chilenos.

El costo de la represión, con miles de presos, cientos de víctimas de mutilación ocular, denuncias de tortura y violación, genera un frente de protesta adicional. La protesta general, no unificada ni con voceros formales ni comando organizativo, suma sectores y banderas. Múltiples causas y demandas locales y específicas, en sindicatos, colectivos o plataformas, se suman desde diversos sectores al estado general de protesta y deliberación social desde las calles.

Chile saca a la luz sus fuerzas políticas de distintas tendencias. En las movilizaciones se mezclan símbolos y actitudes que nos permiten imaginar de qué está compuesto el levantamiento chileno. Encontramos varias generaciones, y las tendencias más o menos radicales, de izquierda, progresistas, incluso nacionalistas, que componen la identidad política latinoamericana. Disputas como las vividas en el gobierno de la unidad popular forman parte de lo que se destapa y aparece como heridas nunca selladas. En Asambleas o entre amigos se escucha sobre los cordones industriales, sobre la posibilidad de una vía armada o pacífica para el socialismo, sobre los horizontes a los que se suman visiones políticas nuevas influenciadas por la lucha de autodeterminación mapuche o la lucha de las mujeres.

En el corazón de las movilizaciones la primera línea de jóvenes que enfrentan la represión es compuesta por una clase trabajadora y estudiantil producto del neoliberalismo que dice basta. Más atrás, encontramos banderas, mapuches, anarquistas de la nación, expresando que algún cambio es necesario, y perfilando ya las posibles frustraciones de quien no se contentará con un cierre desde arriba, con una incorporación meramente simbólica de principios de igualdad social, plurinacionalidad o derechos diversos.

El escenario chileno es prometedor, como inspiración continental a la rebeldía y ruptura anti neoliberal. Sus asambleas y movilizaciones no se constituyen como doble poder ni disputan el lugar de los partidos en las instituciones, que parecen escindidos

del proceso de movilizaciones, con lógica descentralizada e irrepresentable. Como las asambleas de barrio que siguieron al estallido de diciembre de 2001 en Argentina, experiencias solidarias, de creación de lazos, de pensamiento político y acciones militantes, podrán decantar para nuevos liderazgos que normalicen la situación y canalicen el descontento por los mecanismos habituales. Podrán también ser laboratorios para pensar lo común y continuar contestando un sistema.

Por lo pronto, las calles ponen en agenda la realidad de los de abajo, de los explotados, de los sin voz, siendo hoy la fuerza política que exige respuestas.

## CONCLUSIÓN

Mientras la derecha populista llega al poder en Brasil, en Argentina hay un retorno progresista que, sin embargo, apuesta a consolidarse desde un lugar diferente del kirchnerismo anterior, sin rupturas ni conflictos, aún más conciliador, por tanto, eliminando los pocos elementos de disputa que al menos simbólicamente el kirchnerismo evocaba, y le permitieron volver, recuperando apoyo, ante el fracaso de Macri. En Bolivia, el progresismo es desplazado, se recurre a la retórica del golpe, como en Brasil, pero no es claro que un nuevo gobierno constituya un nuevo liderazgo. El hiperpresidencialismo lleva a una crisis que no encuentra un canal de estabilización. En ese sentido, Bolivia se acerca a Chile, donde la protesta que se expande, en este caso, contra un gobierno de derecha, abre un camino todavía sin solución a la vista, y con posibilidades de que se cierre con frustración y continuidad de la crisis, sin cambios concretos.

Chile muestra una situación diferente a la del resto de los países de la región. El conflicto es el orientado contra el neoliberalismo, la jubilación, la salud, la educación, la vida. No hay un juego entre dos actores políticos e incluso la izquierda, cuando se acerca a dialogar o acuerda un plebiscito constitucional, muestra clara-

mente como deja todavía un gran espacio abierto de continuidad de la rabia y la protesta, no cubierto por actores institucionales, y que sólo se expresa en la calle como enfrentamiento, y en la persistencia de la movilización. Las dificultades del gobierno chileno para controlar la situación, que también contó –como en Bolivia– con desobediencia militar para seguir una línea de control represivo de la movilización social, son evidentes, tanto como la falta de caminos políticos claros para encausar esas protestas. En este sentido, el ejemplo de los progresismos tampoco se muestra esperanzador. La situación es de vacío, frente a la continuidad del neoliberalismo y ante la amenazadora derecha y la falta de una izquierda que más allá del control gubernamental y la administración de los consensos existentes, proponga caminos de transformación.

La región muestra estar integrada a tendencias políticas parecidas, a pesar del fracaso de las instancias supragubernamentales como Mercosur o Unasur, sin ninguna incidencia. El bolsonarismo ha servido como ejemplo para derechas que buscan alinearse con su discurso; Perú ha sido sacudido por escándalos de corrupción de empresas brasileñas, llevando a ex presidentes a la cárcel y generando amplias movilizaciones. El Frente Amplio uruguayo se incluye perfectamente en la lógica del progresismo y la derecha paraguaya también asimila discursos y lógicas de la elite económica regional, incluso con el papel del agronegocio, que involucra a toda la región, independientemente del grado de desarrollo capitalista alcanzado en el pasado.

Venezuela merecería un análisis aparte, por su conexión con la política colombiana, el interés norteamericano y su papel simbólico con influencia en buena parte de la izquierda latinoamericana, incluso autonomista. El análisis de la situación interna de los procesos políticos muestra, sin embargo, que la clave hoy está entre el gobierno y la movilización, sin que las teorías sobre alineamientos geopolíticos y bloques puedan explicar la opción del progresismo por mantenerse dentro del orden, ni de su caída.

Una fuerza gravitacional del sistema lleva todo gobierno de izquierda en Sudamérica a un centro de moderación y adaptación

a los consensos y márgenes estrechos en que el poder de siempre permite moverse. Es por eso que el avance de la derecha se da en una paradójica situación en que se derriban gobiernos que se esforzaban por cumplir con los mandatos del mercado y el consenso neoliberal, además de favorecer aliados empresariales del poder económico, iglesias y fuerzas de seguridad.

Al margen de algunas medidas “populistas” que podrían matizar la última afirmación, la comunicación aprovechada por la derecha, a tono con la derecha mundial, es ideológica, de principios conservadores, además de la corrupción. Ejercer el poder y ganar elecciones en Sudamérica, con apoyo millonario de empresas privadas, que pagan sus favores, no es una actividad que no abra flancos de ilegalidad que puedan ser aprovechados contra cualquier gobernante de hoy en Sudamérica. Es correcta, al mismo tiempo, la crítica a la discrecionalidad con que se acude a la justicia en la transición a nuevos gobiernos.

Al margen de la judicialización de la política, que prolonga el tiempo de disputa electoral, sin que estén en juego las cuestiones centrales del modelo de sociedad y la organización de la vida. La polarización electoral se vive como una guerra en la que el no apoyo a uno de los bandos se vuelve necesariamente colaboración con el otro. Esta visión se impone en la política latinoamericana conectada con una mirada geopolítica que, centrada en Cambridge Analytica, la denuncia de guerra híbrida y avance de la extrema derecha, se vuelve la mejor defensa del progresismo, en una guerra fría que tiene como blanco las voces críticas, autónomas, que deberían callar ante la amenaza de la derecha, muchas veces cómplice con el progresismo en los consensos que sostienen el capitalismo y prioridades políticas estatales.

Las elecciones se vuelven escenario de disputa simbólica y afectiva, a favor y en contra de líderes, movilizando banderas de justicia social, soberanía, desarrollo económico y empleo, o entonces corrupción, seguridad, valores religiosos y nacionalismo. Más allá del debate que enfrentar al progresismo con la derecha bolsorista, podemos ver, sin embargo, una oposición más importante

entre la gente, el 99%, los de abajo, movilizados, contra el sistema, el modelo neoliberal, el gobierno del capital, con sus distintos matices ideológicos y políticos. Las respuestas institucionales y del sistema político, así, no se alinean con la voz de las calles. Se crea entonces un vacío o espacio político autónomo que amenaza medidas impopulares, presidentes de uno u otro signo político, y aparece como lugar desde donde la bronca, descontento, desencanto, rabia personal, se vuelve colectiva.

La ausencia de revueltas en las calles en algunos países no excluye la presencia de malestar y falta de respuestas desde arriba. El voto contra todo gobierno, la abstención, la opción por candidatos de discurso contra el orden también expresan que, aunque no haya horizontes de reformas a la vista, algo hay que hacer, la olla de presión puede explotar en cualquier momento. En el pensamiento crítico se exploran ideas que puedan escapar a los lugares comunes del keynesianismo, liberalismo, socialismo estatal, en una época abierta en que el encuentro colectivo en las calles puede prefigurar una sociedad diferente, también encuentro de diferencias y, concentrando sus energías, en superar la vida difícil del capitalismo desigual.

La derecha del discurso de odio, represión, del poder, aprovecha el vacío del fracaso progresista, como gráfica en Bolivia la asunción de Añez, ante la impotencia de la mayoría parlamentaria del MAS. Parece diseñarse un camino interesante cuando, desde las calles, de Chile, y en los territorios indígenas de todo el continente, se piensa contra los de arriba y el arreglo neoliberal colonial de décadas. Lejos de alistarse en una guerra entre potencias internacionales que expresarían localmente un bando estatal donde identificarse, una política de rechazo al autoritarismo, machismo, securitarismo, financierización, explotación y colonialidad se encuentra, actúa en conjunto y busca por donde abrir un momento de insurrección que rechace las imposiciones desde arriba.

## BIBLIOGRAFÍA

- El Comercio, R. (2019). Conaie tilda de ‘oportunismo’ a las declaraciones de Rafael Correa sobre fallecidos, heridos y detenidos. Recuperado el 13 june de 2020, de <https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-correa-twitter-declaraciones-manifestaciones.html>
- Schavelzon, S. (2013). *El Nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia*. Bolivia-CLACSO.
- Schavelzon, S. (2018). “Teoría de la revolución en Álvaro García Linera: centralización estatal y elogio de la derrota”. Recuperado el 9 de june de 2020, de <https://www.rebellion.org/noticia.php?id=240668>
- Taddei, R.; Bulamah, R. & Schavelzon, S. (2020). “Bolsonaro and the Unmaking of Brazil”. Recuperado el 8 de june de 2020, de <https://culanth.org/about/about-the-society/announcements?token=ugiTkAY1VcXQleimZMuRBCaVBmV0wBYH>
- Zibechi, R. (2019). “Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha”. Recuperado el 13 june de 2020, de <https://desinformemonos.org/bolivia-un-levantamiento-popular-aprovechado-por-la-ultraderecha/>